

ELECCIONES 2002, DE LA IMPROVISACION AL CAMBIO

Luis B. Guerrero Figueroa
Congresista de la República

Una reciente noticia difundida por RPP nos invita a la reflexión: del total de autoridades municipales electas en 1998, 760 se encuentran con vacancia, y de estas 37 alcaldes y 33 regidores se encuentran en la cárcel, información que merece un análisis importante.

Cabe destacar que en 1998 hubo en promedio de aproximadamente 8 candidatos por gobierno local, cifra que podría expresar la concepción de un modelo según el cual el Estado es un botín, modelo agudizado por el privilegio de las mayorías y la generación de desconfianza por quienes realmente tienen vocación de servicio público. Las actuales elecciones no se diferencian de aquellas respecto en cuanto al número de candidatos, pues incluso el promedio se ha incrementado, comportamiento que es análogo en el caso de las candidaturas a los gobiernos regionales.

La década de los noventa representa la pérdida de legitimidad de los partidos políticos, la exacerbación del centralismo, y la agudización de la cultura estatista, todo lo cual contribuye a explicar la profusión de candidatos a los gobiernos locales y regionales.

En el presente Gobierno, estas elecciones deben representar una oportunidad para ir fortaleciendo nuestra institucionalidad. En ese sentido, en la legislación concerniente a la descentralización se ha incorporado la necesidad de que los candidatos, en el momento de su inscripción, presenten sus propuestas de planes de gobierno.

Las cifras mostradas evidencian la carencia de instrumentos que permitan un mejor control social, por lo que la exigencia de la presentación de dichos planes evitará la improvisación y las propuestas ficticias muchas veces genuinas pero insuficientes para resolver los problemas de nuestro país. Asimismo facilitará que nuestros ciudadanos ejerzan su derecho político mediante la revocatoria de autoridades o la remoción de funcionarios.

Es importante destacar que la ciudadanía también contará con mejores instrumentos que le permiten la participación en la formulación de planes y presupuestos, hecho que fortalece su capacidad de acceso a la información y la transparencia en la gestión pública. De esa manera será posible contribuir con un cambio de actitudes que eviten que nuestras autoridades tengan que abandonar el país o concluir en la cárcel.

Al permitir participar a nuestra ciudadanía en las decisiones públicas se contribuye con una mejor gestión, siendo esto una adecuada opción para compatibilizar las exigencias sociales con la capacidad institucional de los diferentes niveles de gobierno. No obstante ello, es igualmente necesario el desarrollo de los partidos políticos, en tanto mediadores entre la sociedad y el Estado, correspondiéndoles mediante sus labores de capacitación reducir la improvisación y generar un mayor conocimiento y conciencia social sobre la cosa pública.

Lo trascendental en estas elecciones será contar con un conjunto de actores que fortalezcan nuestra democracia, siendo ellos los llamados a afrontar los retos de la descentralización y la modernización de un Estado que enfrenta fundadas expectativas de cambio.